

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES SEDE ECUADOR
AREA DE HISTORIA
PROGRAMA DE POSTGRADO EN HISTORIA ANDINA 1989-1991

Tesis presentada a la Sede Ecuador de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales

por

MARTA IRUROZQUI VICTORIANO

Como uno de los requisitos para la obtención del grado de
Maestro en Historia Andina

PROFESOR ASESOR: XAVIER IZKO

Junio, 1992

INDICE

FUNDAMENTOS SOCIOCULTURALES DE LA ELITE PACENA, 1899-1920

INDICE	II-IV
INTRODUCCION	V-XIII
CAPITULO I. LA ELITE EN LA HISTORIOGRAFIA SOBRE BOLIVIA	2
1. Precisiones conceptuales. La elite del poder	3
2. Las élites y el Estado Nacional en la historiografía boliviana	12
3. Hipótesis de trabajo. Nuevas propuestas sobre la élite boliviana	17
Notas	24
CAPITULO II. LA GUERRA FEDERAL DE 1899. CRISIS Y REMODELACION DE LA ELITE BOLIVIANA	27
1. Principales tendencias historiográficas acerca de la Guerra Federal de 1899	29
1.1. Acerca de las causas del conflicto	29
1.2. Sobre la participación indígena	33
1.2.1. Intervención indígena autónoma y premeditada	34
1.2.2. Intervención indígena forzada por los acontecimientos	37
2. Propuesta de Investigación. Otra manera de entender la Guerra Federal	40
2.1. El conflicto entre federales y unitarios	40
2.2. La participación indígena	47
2.2.1. La campaña proselitista de los liberales en el Altiplano	47
2.2.2. Las razones del indio. Significado de Mochoza	51
Notas	64

CAPITULO III. LAS ELITES Y LA CUESTION DEL INDIO	70
1. Culpables o inocentes. La élite y el debate sobre qué hacer con el indio	72
1.1. Términos generales del debate	72
1.2. El indígena, elemento degradador. Alternativas para neutralizarlo	74
1.3. La defensa del indio. El ejemplo de Bautista Saavedra en el Juicio de Mohoza	76
Notas	80
CAPITULO IV. LAS RESISTENCIAS AL PROYECTO LIBERAL. LAS PROPUESTAS A FAVOR DE "LA REDENCION DEL INDIO"	86
1. La construcción de la imagen del indio	87
2. Los intelectuales y la simbiosis indio-mestizo	91
2.1. Argumentaciones generales sobre la posibilidad de "Redención del indio"	92
2.2. La redención del indio y del mestizo a través de las obras de Alcides Arguedas, Franz Tamayo y Armando Chirveches	94
2.2.1. Propuestas sobre el indio	97
2.2.1.1. La población indígena impide el desarrollo nacional	97
2.2.1.2. Propuestas para solucionar el atraso indígena. La Reforma educativa en <u>Creación de la Pedagogía Nacional</u> de Franz Tamayo	100
2.2.1.3. La crítica de Alcides Arguedas a los terratenientes. El ejemplo de <u>Raza de bronce</u>	103
2.2.1.4. El indio de los intelectuales	111
2.2.2. Propuestas sobre el mestizo	113
2.2.2.1. El indio no debe convertirse en mestizo	113
2.2.2.2. El control de la capacidad electoral del mestizo. La <u>Candidatura de Rojas</u> de Armando Chirveches	115
Notas	126

CONCLUSIONES	132
ABREVIATURAS	140
PERIODICOS	141
BIBLIOGRAFIA	143

CAPITULO II

CAPITULO II
LA GUERRA FEDERAL DE 1899. CRISIS Y REMODELACION
DE LA ELITE BOLIVIANA

Indios analfabetos, ignorantes, puestos al margen de la civilización y del destino humano, intervienen en la revolución: son liberales y son federales (Rodolfo SALAMANCA LAFUENTE, 1946)

La Guerra de 1899 implicó la sustitución en el poder del Partido Conservador por el Partido Liberal mediante un golpe de Estado cuya consecuencia más inmediata, una vez terminada la contienda a favor de los liberales, fue el cambio de la sede de gobierno de Sucre a La Paz, aunque la primera ciudad continuará siendo nominalmente la capital del país. Una de las peculiaridades de este conflicto de remodelación hegemónica en el interior de la élite boliviana, consistió en la participación de la población indígena aymara del Departamento de La Paz como ejército auxiliar de los liberales. Su presencia determinó el resultado del combate al tiempo que provocó otro tipo de problemas a las élites enfrentadas. Si bien en un principio los indígenas actuaron a las órdenes del ejército federal, a medida que fue desarrollándose la contienda fueron manifestando objetivos autónomos bajo líderes propios como el curaca de Sicasica, Pablo Zárate Wilka, que ponían en peligro los privilegios de la mancomunidad criolla-mestiza. Esto quedó de manifiesto cuando un batallón liberal, el batallón Pando, fue asesinado por los indios comunarios del Cantón de Mohoza. Anteriormente ya se habían producido masacres de miembros del ejército conservador o unitario como las de Ayoayo y Corocoro, pero la trascendencia de Mohoza radicó en que los soldados muertos pertenecían al mismo bando que los indios apoyaban. Finalizada la lucha y asumida la presidencia por el coronel Pando, jefe del Partido Liberal, se llevó a cabo la represión de los indígenas que habían contribuido al triunfo, quedando

ejemplificada esa acción en el Juicio de Mohoza (1901-1904), en el que se procesó a los implicados de la matanza del batallón liberal.

Por otro lado, a partir de la victoria federal, la élite paceña adquirió el poder político necesario para reforzar y potenciar su fuerza económica y convertirse, en consecuencia, en la más apta para llevar a cabo el proyecto de reestructuración oligárquica, iniciado por los grupos conservadores radicados en Sucre (Chuquisaca) a raíz de la implantación del régimen de partidos políticos. La Guerra de 1899 será, por tanto, uno de los dos momentos de regeneración de dicho proyecto cuya finalidad primordial consistía en fortalecer la conciencia e identidad de clase en el interior del sector social privilegiado.

Explicado esto, el análisis de ese proceso de reconversión hegemónica se organiza en dos partes. En la primera se abordan las posturas historiográficas al respecto, y en la segunda se esboza la propuesta de interpretación alternativa que defiende esta Tesis y que hace hincapié en el proceso de reestructuración y reconversión de la élite como su objetivo político prioritario. Para su comprensión se han tenido en cuenta las causas de la guerra, cómo y para qué se utilizó el discurso federalista, el significado del pacto oligárquico sintetizado en la Unión Liberal y la participación india como ejército auxiliar de los liberales. Este último aspecto, como ya se ha señalado, condiciona los resultados de la contienda y da al indio un protagonismo político no buscado por los liberales que amenaza con reestructurar las relaciones de poder en la sociedad boliviana. Por esta razón, una vez finalizada la guerra, se lleva a cabo una estrategia de represión indígena expresada en la exaltación de la "guerra de razas" que hará de la cuestión qué hacer con el indio el tema de debate nacional durante más de dos décadas.

1. Las principales tendencias historiográficas

El análisis historiográfico de la Guerra federal de 1899 requiere tener en cuenta dos niveles de investigación, las causas del conflicto y los actores sociales que intervinieron en la contienda.

1.1. Acerca de las causas del conflicto

Respecto a las causas que provocaron el enfrentamiento entre federales y unitarios, es decir, entre liberales y conservadores, predominan aquellas interpretaciones que ven como trasfondo de la guerra de 1899 el enfrentamiento entre dos bloques rivales tanto por actividades económicas contrapuestas como por desequilibrios regionales. Al primer tipo de enfrentamiento pertenecería el caso de terratenientes tradicionales y mineros contra comerciantes, o el caso de mineros de la plata contra mineros del estaño, así como el referido a la pugna entre terratenientes señoriales y una emergente burguesía urbana. Por otra parte, el otro enfrentamiento, el de carácter regional, tendría su mejor expresión en la competencia por la ampliación de mercados y de participación política que se desarrollaría entre las provincias del norte y las del sur, más concretamente, entre La Paz y Sucre.

En la mayoría de los casos, los historiadores entremezclan ambos tipos de contraposiciones. Prueba de ello es que el modelo de una oligarquía tradicional con un fuerte poder económico basado en la minería y vinculado a capital chileno, se une a los intereses del sur encabezados por la ciudad de Sucre. A su vez, la imagen de un nuevo y ascendente grupo de comerciantes con intereses en la minería del estaño y la extracción de goma elástica se identifica con La Paz.

Un ejemplo de esa interacción sería el desarrollado por el boliviano Jose Fellman Velarde que, con una mezcla de marxismo vulgar y nacionalismo mestizo, percibe el conflicto de 1899 como un enfrentamiento entre las clases medias de La Paz, los liberales, y las clases dominantes de Sucre, los

constitucionalistas, esto es, como una lucha entre mestizos y criollos. Propone que los mestizos liberales del norte habrían despertado el instintivo anhelo de los indios de obtener su libertad como pequeños propietarios. Esto se produciría en medio del auge de la pequeña burguesía hegemónica, que mediante el incentivo de la reforma agraria lograría que los indígenas venciesen a las tropas sureñas (1). Por su parte, Alipio Valencia Vega atribuye el conflicto de 1899 a una rivalidad entre el capitalismo minero de La Paz y los hacendados feudales de Sucre. Igual opinión mantiene Sergio Almaraz para quién el enfrentamiento de 1899 se dió entre una nueva oligarquía formada en el norte por comerciantes burgueses y terratenientes y la vieja oligarquía feudal del sur asentada en la minería (2).

En esta misma tendencia pero invirtiendo el reparto de culpabilidades, se inscribe el trabajo de Ramiro Condarco sobre Aniceto Arce. Para él, la clase dominante capaz de dotar al país de progreso era la chuquisaqueña pero su proyecto terminaría por declinar a causa de las presiones "imperialistas" de los liberales que provocarían su disolución económica y política. Según Condarco, su principal consecuencia sería la sustitución en el poder de los "empresarios mineros" por "la vulgar e inculta acción de la pequeña burguesía septentrional, siempre enferma de hambrienta avaricia y de localismo serrano, que acabó por arrebatarse a la gran burguesía del sur su hegemonía económica y política mediante procedimientos imperiales, fraguados a costa del engaño del laborioso pueblo aymara - moralmente superior a ella- a expensas de lo cual se había formado como clase sin mayores posibilidades orgánicas de mejor porvenir económico, político y cultural" (3). A su vez, ambas interpretaciones aseguraban que la participación indígena estuvo sujeta a manipulaciones por parte de políticos liberales. Esta idea se repite también en los textos que sugieren la existencia de una competencia subyacente entre los mineros de la plata del sur y los mineros del estaño del norte (4).

Un planteamiento diferente a los anteriores y que

proporciona un análisis dependentista de los acontecimientos es el de Juan Albarracín Millán. Atribuye la guerra de 1899 a causas externas, es decir, a la sustitución de las Compañías inglesas por las norteamericanas. El derrocamiento de los conservadores tuvo el carácter de "una victoria de las fuerzas filo-norteamericanas que actuaban desde el partido liberal y, como tal, estuvo en consonancia con similares acontecimientos producidos en todo el continente" (5). Otra opinión partidaria de la influencia de las factores internacionales como condicionantes de la Guerra de 1899 es la expresada por James Dunkerley. El éxito militar del Partido Liberal era resultado del apoyo campesino, pero la fuerza política y económica de la revolución tenía su origen en la caída de la plata en el mercado mundial. El fracaso de la campaña a favor del bimetallismo y la adopción generalizada del patrón oro en las naciones industrializadas dieron lugar a la reducción del precio de la plata en la década de 1890, aunque su desplazamiento definitivo ocurrió después de la revolución liberal (6). Por otra parte, aunque ciertos liberales de renombre como Pastor Sainz y la familia Aramayo tenían grandes intereses en el estaño, la zona de su producción se extendía más al norte de la de la Plata. La caída de los conservadores no fue, así, tanto resultado de la competencia de un grupo industrial nuevo, como de la incapacidad de la oligarquía establecida para mantener unidad política en medio de la crisis. No debe olvidarse que el conflicto entre el Norte y el Sur existía antes del auge de la plata y que La Paz fue la ciudad más grande y centro nacional del comercio durante mucho tiempo (7).

Las explicaciones históricas más recientes inciden en la convergencia del enfrentamiento de grupos económicos con el problema regional. La tendencia regionalista tiene una larga evolución, y su aporte a la historia de la sociedad boliviana no siempre ha sido reconocido, particularmente en el siglo XIX, en el que los golpes de Estado y asonadas, así como los fundamentos institucionales de la república, no pueden entenderse al margen de los conflictos que opusieron las

élites políticas y sociales del norte a las del sur, o las del Oriente a las del Altiplano, o las de Cochabamba a las de La Paz. De esta manera, el regionalismo no fue en sus inicios exclusivamente la nostalgia de una comunidad de sangre y costumbres, de una fraternidad provincial, como la evocada por Gabriel René Moreno en su biografía de Nicomedes Antelo con referencia a Santa Cruz (8). Tampoco se trató de simples envidias entre capitales de Departamento por la sede de gobierno, sino que tales conflictos manifestaron las discusiones políticas sobre la organización del Estado. La mayoría de los estudios con esta temática consideran que la guerra civil de 1899 constituyó una línea divisoria entre patrones coloniales de ocupación del territorio -reproducidos durante la República- y los que empezarían a gestarse bajo el mandato norteño-paceño que arrebató el liderazgo y capitalía de la república a la élite de Chuquisaca (9). Sucre alimentó una visión aristocratizante, apegada a mantener las diferencias heredadas de orden colonial mientras La Paz se manifestó abierta a las aspiraciones de ascenso del mestizaje dominante en el país.

Ese desplazamiento de la sede de gobierno a La Paz si bien acentuó un proceso de modernización del Estado boliviano que reforzó las tendencias unitarias pre-existentes y alcanzó su punto culminante en la revolución de 1952, también reactivó el enfrentamiento entre el poder central y los poderes periféricos y, por tanto, revitalizó la cuestión regional (10). La crítica que puede hacerse a ese análisis radica en que se sobredimensiona el papel de la confrontación norte/sur en desmedro del papel que les ocupó cumplir a otras regiones, como las de Cochabamba y Santa Cruz (11), aunque la admisión de ese hecho no invalida que existiera competencia entre departamentos. La Paz se reconoce como un importante centro comercial y, por tanto, como el punto de referencia obligado de exportaciones y importaciones, pero su hegemonía se veía amenazada por la construcción del ferrocarril Antofagasta-Oruro-Potosí-Sucre y Oruro-Cochabamba-Santa Cruz, que la podían desplazar a una situación secundaria. Fue ésta amenaza lo que explica por qué sus sectores dominantes encabezaron la

guerra civil que los enfrentó a "la tradicional oligarquía argentífera sucreña (y en menor medida a los terratenientes cochabambinos)". Es decir, la oligarquía minera, hacendal y comercial de La Paz inútil para forjar un proyecto de desarrollo propio en torno al cual se nucleara la nación y se articulasen las distintas regiones, se disputó la hegemonía del instrumento de relación con los mercados externos: el ferrocarril. El centralismo y el federalismo actuaron entonces como simples pretextos de encubrimiento de esa determinación, tal como lo prueba el inmediato abandono de los postulados descentralizadores a partir de 1900 (12).

Otro argumento a favor del duelo regional, insiste en que la problemática del ferrocarril estaba vinculada estrechamente a la cuestión portuaria. Los intereses comerciales afincados en La Paz unidos a la acción de los latifundistas paceños, que simultáneamente ejercían cargos políticos en las provincias del Departamento, lograron una impresionante movilización agraria en todo el Altiplano con el fin de asegurarse el tráfico marítimo. Su vinculación a Arica supuso, por tanto, la consecución de ese objetivo (13).

1.2. La participación indígena

Independientemente a que el transfondo del conflicto de 1899 obedezca a razones regionales, de competencia minera o de enfrentamiento entre viejas y nuevas oligarquías identificadas con modos de producción incompatibles, es fundamental tener en cuenta el papel desempeñado por los distintos actores sociales que intervinieron en la definición de esa guerra. Sobre todo, esto resulta importante porque el factor decisivo del triunfo de las fuerzas del Partido Liberal frente a las del Partido Conservador fue la participación de la población indígena-aymara del Altiplano. De ahí que la historiografía boliviana y bolivianista que se centra en el análisis y comprensión de la Guerra Federal se interrogue acerca de las características y motivaciones de la presencia india como árbitro del conflicto.

Se pueden señalar dos líneas historiográficas interesadas en comprender qué es lo que habría provocado el apoyo indio a la causa liberal. La primera defiende la autonomía política del movimiento indígena rechazando aquellas interpretaciones que niegan la existencia de un largo y exhaustivo proyecto de sublevación que vería en el conflicto entre partidos la ocasión propicia para manifestarse y hacer realidad sus requerimientos. La segunda, si bien acepta la existencia de peticiones indígenas para la mejora de sus condiciones de vida, está en desacuerdo con que existiera un plan de rebelión tramado a lo largo de veinte años de extorsiones sociales debido al proceso de compra y venta de tierras comunales. En uno y otro caso se admite que el ejército auxiliar indio fue determinante en los resultados de la guerra y no se cuestiona que dicha intervención se vió acompañada por peticiones que pasaban por una remodelación de las relaciones de poder en el campo. Pero surge el desacuerdo a la hora de establecer las vinculaciones entre los liberales y los indios.

La primera opción no niega la campaña de proselitismo realizada por el Partido Liberal en el Altiplano, pero afirma que los indios instrumentalizaron ese esfuerzo para llevar a cabo un proyecto propio de remodelación de las relaciones sociales y étnicas. En contrapartida, la segunda posibilidad insiste en que fue el Partido Liberal el que utilizó y despertó las ambiciones indígenas de mejora de su situación para su propio beneficio.

1.2.1. Intervención indígena autónoma y premeditada

El trabajo de Condarco Morales demuestra que la movilización de las comunidades indígenas fue un factor decisivo para la victoria del Partido Liberal del coronel Pando frente al gobierno constitucionalista del presidente Severo Fernandez Alonso (1896-1899). Se apunta, por primera vez, que los levantamientos indios obedecían a instrucciones que eran parte de un programa cuidadosamente meditado (14). Si bien Condarco no llegó a probar la autonomía de los objetivos indígenas dentro de este frente liberal, dió pié a nuevos

planteamientos que indagasen sobre las iniciativas indígenas y sobre el grado y finalidad de su participación.

Un ejemplo de la receptibilidad de esa propuesta se expresó en los trabajos de Tristan Platt sobre las comunidades de Chayanta. Para este autor la "revolución" boliviana de 1899, cuya consecuencia más notoria fue el traslado del gobierno de Sucre a La Paz, representó la cúspide de una escalada de levantamientos populares que habían comenzado incluso antes de la Guerra del Pacífico (1879-83) llegara a su fin. Platt desarrolló su hipótesis a través de un estudio sobre la resistencia andina que trataba de distinguir entre las instituciones y los sistemas representativos de cada grupo étnico o región, con la finalidad de percibir los diferentes cambios en la política estatal o en las corrientes culturales y económicas de largo alcance. Con el propósito de poder detectar los mecanismos que regían las alianzas y los conflictos en una región rural dominada por ayllus integró las perspectivas etnográficas y las evidencias documentales. De esa simbiosis metodológica dedujo que la creación de un frente anticonstitucionalista integrado por indios y mestizos fue un proceso errático que se vió fortalecido por un descontento general que provenía de diversos grupos de interés, cada uno de los cuales trataba de maximizar sus ventajas estratégicas en los días que siguieron a la rebelión de 1899. Las reacciones indias no fueron simples movilizaciones desde arriba y su acercamiento a otros sectores era el de una mayoría que buscaba "un lugar bajo el sol de la república". Las protestas contra la reforma agraria conservadora expresada en las revisitas surgieron inicialmente de los propios tributarios, y los líderes indígenas tuvieron que basarse en un apoyo crítico a éstos. La revolución de 1899 constituyó, por tanto, la cúspide de la confrontación secular en la que el liberalismo ilustrado intentó acabar con la herencia colonial-andina de Bolivia, en nombre de un historicismo orientado hacia el progreso universal a través de la propiedad privada, la acumulación de capital y el librecambio (15).

Por su parte, Marie Danielle Demelas en su estudio

sobre la incidencia y utilización que se dió al socialdarwinismo en Bolivia, subraya la participación de las tropas indígenas con un papel político activo y autónomo en la Guerra Civil de 1899. El darwinismo representó el deseo criollo de unirse a una ideología de progreso y ciencia, lo que no significaba necesariamente el recrudecimiento del racismo ni la justificación de la opresión sobre los indios a pesar de que el proceso de Mocha marcara el apogeo de ésta tendencia ideológica al interpretarse el juicio como un ejemplo de la criminalidad india. Su valor radicó más bien en que permitió a las élites bolivianas sacudirse la tutela de la Iglesia en su esfuerzo de ser reconocidos como representantes de la civilización (16). El darwinismo social, por tanto, hay que entenderlo como una tentativa de legitimación que los criollos emprendieron ante Europa y ante el mundo occidental en general (17).

Esa interpretación del alcance del darwinismo social se alterna con una defensa de 1899 como una guerra planeada de antemano por los indios. Sin embargo la autora no es capaz de desarrollar ese concepto y menos de demostrarlo, sobre todo porque al intentarlo prioriza las acciones proselitistas y clientelares del Partido Liberal, tal como también hace Tristan Platt. En consecuencia, al proponer que no se vea a la sociedad indígena como una masa indiferenciada y manipulada consigue el efecto contrario; es decir, la participación india en la contienda de 1899 aparece al servicio de un partido que no defiende su causa sino que sólo instrumentaliza su apoyo para vencer a los conservadores. Con esto, invalida la existencia de "medio siglo de estrategias indias" a pesar de que se aconseje investigar una supuesta y fantasma "indiada de palacio" (18). Se da, por tanto, una contradicción entre querer descubrir una "indiada" autónoma que prepara su acción anticipadamente para luego aprovechar las crisis internas del poder blanco-mestizo, y el hecho de resaltar la función de las parentelas a las que estarían vinculados los mismos indígenas (19).

En resumen, tanto Tristan Platt como Marie Danielle

Demelas insisten en la autonomía política de los indígenas en la Guerra Federal de 1899, defendiendo la idea de una conjura contra la reforma agraria que los habría dotado de una organización y objetivos propios mucho antes de ese acontecimiento. Pero ninguno de estos autores logra desvincular la protesta indígena de la presencia liberal en el campo a través del compadrazgo y las clientelas desde 1880. Además, tampoco explican ni el brusco reflujó de la acción colectiva indígena acabado el conflicto, ni las distorsiones que introdujeron las disputas locales, ni las diferencias entre indios y "vecinos de los pueblos", ni el significado de la "cholificación" en términos de movilidad social. Sin embargo, esta crítica no invalida el hecho fundamental de que el estudio del levantamiento indígena de 1899 permite analizar la historicidad de las percepciones colectivas y su articulación con acciones transformadoras. Su participación de modo premeditado o casual ocasionó en todo caso que se luchara contra el monopolio de la tierra llevado por la hacienda, contra el monopolio comercial del hacendado y contra el monopolio del poder político regional (20).

1.2.2. Intervención indígena forzada por los acontecimientos

Las opiniones que van en esta línea si bien rechazan la idea de un proyecto de rebelión planificado y organizado por medio de jefaturas disciplinadas, no niegan que el descontento indígena derivado del proceso de compra y venta de tierras de comunidad y de los abusos del ejército se concretase en una movilización india armada en contra del poder gubernamental. Por otro lado, la participación india en la contienda se interpreta de dos modos. El primero entiende la rebelión como esporádica y sin relación con los proyectos liberales, mientras que el segundo la considera producto de una campaña de propaganda y de solivantamiento auspiciada por éstos. El resultado fue un acuerdo asimétrico entre José Manuel Pando y los caudillos aymaras, liderados por Pablo Zárate Wilka, sobre un posterior reparto y renovación de las relaciones de poder.

En consecuencia, no se cuestiona la ingerencia demagógica de los liberales en el campo pero se la interpreta como abusiva: el Partido Liberal mediante promesas de restitución de tierras instrumentalizó la mano de obra indígena contra el ejército unitario o conservador.

De lo anterior se desprenden varias conclusiones encaminadas a resolver y definir las características nacionales de Bolivia como ocurre con los textos de René Zavaleta para quien la Guerra Federal de 1899 tuvo consecuencias nacionales pero no fue un hecho verdaderamente nacional; lo único que propició la participación aymara fue la instalación del "darwinismo social" como ideología interior del Estado oligárquico. El activo descontento de los indios no obedecía a un proyecto planificado de sublevación sino que era la respuesta directa a la apropiación de tierras comunales que se dió entre 1868-1871 y 1874-1899, de ahí que sucediera en las provincias de Omasuyos, Pacajes, Sicasica e Inquisivi que era el área de expansión del latifundio y "refundación de la oligarquía" (21).

Con la Guerra Federal los indios tuvieron ocasión de expresar su descontento frente a los abusos del ejército, el cual no sólo había participado activamente en el sofocamiento de las rebeliones indígenas opuestas a la venta de tierras comunales sino que también había tomado sus víveres. De manera que fue al ejército al que se dirigió la violencia indígena de modo inicial y secundariamente a los hacendados. Los sitios de mayor agresividad indígena fueron Corocoro, Ayo Ayo y Mohoza en el Departamento de La Paz, Peñas en el departamento de Oruro y Sacaca en el de Potosí. Los levantamientos de indígenas se dieron casi paralelamente al movimiento de tropas en respuesta a las acciones de los soldados que les habían venido robando reservas de comida y de forraje. Esa usurpación de bienes indígenas vino a ser la principal causa inmediata de la rebelión indígena. La primera y más grande manifestación violenta por parte de los indios se dió a partir de las expediciones de abastecimiento del ejército unitario hechas el 12 de enero y el 20 de enero de 1899 en la provincia de Coro-

coro que fueron vengadas en la llamada hecatombe de Ayo-Ayo del 24 de enero de 1898. Esta misma interpretación es aplicable a lo sucedido en Mohoza, pero esta vez teniendo como protagonistas del saqueo a las tropas liberales del escuadrón Pando que se dedicaron a incautar provisiones de los habitantes del pueblo y, en consecuencia fueron masacrados por indios que eran sus propios aliados (22).

Frente a una interpretación como la anterior que prioriza como causas de la rebelión el comportamiento de una institución social, el ejército, ajena a la vida cotidiana de los indios, Andrew Pearse hace referencia a la acumulación de fricciones diarias entre los indios comunarios y los "vecinos de los pueblos" para entender contra qué y quiénes iba dirigido el ataque indígena. En 1899, los liberales pusieron en cuestión el poder de los conservadores del sur. Para derrocar su hegemonía intentaron aprovechar el apoyo campesino alimentando su malestar contra el gobierno. Pero cuando los campesinos se opusieron a él también lo hicieron contra los funcionarios provinciales y cantonales, y contra el resto de los vecinos de los pueblos porque consideraban a todos ellos activos practicantes de formas de dominación indias. En los pueblos estaba la sede de un sistema judicial que había afectado sus derechos sobre la tierra permitiendo negocios abusivos y robos de tierras, lo que justificaba que se acusase a sus representantes de la apropiación de su trabajo y producción y en consecuencia se atentara contra sus vidas. La identificación de los rasgos blancos y mestizos con las instituciones de poder responsables de la progresiva desestructuración de las comunidades indígenas implicó que se agrediese a los "vecinos de los pueblos" como culpables inmediatos. La población indígena se sublevaba contra un conjunto de abusos haciendo responsables a sus ejecutores y no a sus promotores. Cuando se pretendía una ruptura del sistema vigente en el agro y, por tanto, los indios amenazaban con el inmediato desmantelamiento de la separación étnica, estaba en funcionamiento una acción refleja y no un proyecto meditado de transformación social (23).

2. Propuesta de Investigación. Otra manera de entender la Guerra Federal

Se admita o no la existencia de un programa indígena de sublevación y reivindicaciones anterior a 1899, la movilización militar campesina constituyó una amenaza y trastorno de las relaciones sociales de control central que eran esenciales para la vida de la república tal como la concebía la mancomunidad criolla-mestiza. Al tiempo, confirmó graves divisiones en el bloque gobernante que dieron lugar a nuevas alianzas. Los orígenes de éstas pueden encontrarse en el intento de acercamiento del Presidente conservador Severo Fernández Alonso a los liberales tras las elecciones de 1896 y en la falta de solidez de las afiliaciones políticas de gran parte de la élite de la postguerra inmediata (24). Por tanto, atendiendo a lo expuesto hasta ahora, la propuesta de investigación que mantiene esta Tesis de Maestría considera primordial diferenciar las razones que tuvo la mancomunidad criolla-mestiza para intervenir en la Guerra Federal de 1899 de aquellas otras razones que llevaron a la población indígena a participar en ella. Se distinguen, así, dos planos distintos de acción: primero, la pugna entre liberales y constitucionales que representaba una querrela interna entre dos sectores de un mismo grupo social; segundo, la oposición entre la población indígena y los sectores dominantes que suponía un antagonismo entre castas diferentes. Esta investigación considera necesario examinar por separado ambos planos de acción ya que encubren de hecho dos guerras: la guerra entre fracciones de la élite por monopolizar el poder político y la guerra reivindicativa de los indígenas frente a la acción opresora de una élite comprendida en conjunto (25).

2.1. El conflicto entre federales y unitarios.

El Partido Liberal en 1899 rompió con la tradicional posición de compromiso entre éste y los partidos conservadores

-Constitucional y Demócrata- que pretendían mantener la estructura social existente a través de una idea de progreso económico concentrado en la expansión de la minería de la plata mediante la construcción de vías férreas. La ruptura se produjo no por la existencia de disensiones ideológicas entre ambos grupos partidarios, sino porque la continuidad de la élite conservadora ponía en peligro los presupuestos que hacían del régimen de partidos un mecanismo de reestructuración de la sociedad bajo la lógica señorial de su reconversión (26). Pero los conservadores no se oponían a ello. Al contrario, lo habían hecho posible a lo largo de su mandato gracias a haber trasladado la relación patrimonial de intermediación del soberano con sus súbditos a los partidos políticos, con lo que, si bien, en teoría, se amplió la base de inclusión ciudadana, en la práctica se la hizo excluyente.

El periodo Conservador (1880-1899) constituyó, por tanto, un periodo de transición política que puso de manifiesto todas las contradicciones e inconveniencias del sistema y del modo de vivir caudillista, pero al hacerlo puso también en peligro la continuidad del proyecto de élite porque circunscribió ese proyecto sólo a los intereses de la minería de la plata. A la larga, ese comportamiento rompió su legitimidad constitucional permitiendo a los liberales la asunción de los mismos presupuestos oligárquicos pero bajo la imagen de una alternativa regeneradora. El Partido Conservador no podía llevar a cabo hasta el final y con éxito el proyecto de reconversión de la élite porque su hegemonía no estaba garantizada a largo plazo dadas las dificultades del precio de la plata en el mercado mundial y el creciente control del sector minero por las empresas extranjeras (27). Igualmente les era adverso el conflicto regional agudizado por la existencia de un circuito competitivo cuyo centro era la ciudad de La Paz, vinculado al mercado internacional a través de la quina y el cobre. Además la conclusión del ferrocarril Mollendo-Puno en 1874 fortalecía sus relaciones comerciales con Arequipa y permitía una posterior vinculación a Arica. A esto hay que añadir que la Guerra del Pacífico (1879-1883) dotó al Partido Liberal de

un lenguaje nacional, el guerrista, que denunciaba la alianza de los grandes mineros y líderes conservadores con el capitalismo chileno. Esto permitió el resquebrajamiento de la idea tradicional minera de una Bolivia mediterránea, al tiempo que dió salida a los problemas regionales mediante la prédica federalista. Tal panorama se complejizó por las distorsiones que la Ley de Ex-vinculación (1876) creó tanto en los terratenientes y mineros en términos de tierra y manos de obra, como en los sectores indios y mestizos por delimitación de las propiedades.

Descritas esquemáticamente las dificultades que enfrentaron los conservadores para continuar en la presidencia, conviene señalar qué sectores se agruparon en torno a la bandera federal-liberal a partir de la Ley de Radicatoria de 1898 que reconocía a Sucre como la sede permanente de gobierno. Tres fueron las fuerzas recíprocamente adversas que actuaron en el seno de las filas revolucionarias en la Guerra Federal:

1. Los intereses políticos de los liberales.
2. Las aspiraciones regionalistas de los conservadores paceños, a las que prestaban su apoyo algunos liberales de La Paz.
3. Las particulares ambiciones de la población indígena cuya participación en la guerra civil no estaba exenta de finalidades propias ya sean prefijadas de antemano o producto de la dinámica de la guerra.

De las tres interesa analizar en este apartado únicamente las dos primeras, que tienen en común hacer referencia explícita al conflicto en el interior de la élite, cuyas causas son ajenas a las motivaciones de movilización indias. Pero antes de pasar a ello conviene insistir en la idea eje que organiza el actual trabajo, es decir, en el proyecto de reconversión y reestructuración de la élite boliviana. Dicho proyecto necesitaba para su materialización y continuidad de una serie de momentos regenerativos. Estos fueron los golpes de Estado ocurridos en 1899 y 1920, encabezados por el Partido Liberal y el Partido Republicano,

respectivamente. A través de tales acciones, se buscaba la sustitución de la élite en el poder por otra que respondiese más adecuadamente a la supervivencia global de la clase dominante. Si bien los sectores privilegiados asentados en el gobierno, una vez terminada la Guerra del Pacífico (1879-1883), fueron los vinculados a la minería de la plata, la sustitución del patrón plata por el patrón oro y su pérdida de competitividad en el mercado ocasionó su progresiva decadencia. Se hacía entonces imprescindible un relevo en la dirección del país que diese primacía a otra fracción de la élite con posibilidades para llevar a cabo el proyecto de reconstrucción oligárquica. El grupo encargado de ello fue el que tenía un régimen de inversiones más diversificado y con mayor presencia comercial, esto es, la élite paceña. Su propuesta hegemónica se identificó con la del Partido Liberal, pero los miembros de éste no eran todos partícipes de este sector privilegiado aunque esto no quedó de manifiesto hasta después de la Guerra Federal de 1899.

En un principio el Partido Liberal estaba integrado por todos aquellos que de un modo u otro, ya fuera por su vinculación anterior a los beneficios del régimen caudillista o por su ausencia de intereses directos en la minería de la plata, estaban excluidos del gobierno. Se trataba, por tanto, de un partido de filiación heterogénea, al que también se habían unido aquellos elementos tradicionales que la previa consolidación del Partido Conservador había excluido. A estos se sumaron otros elementos resultantes de las nuevas formas de subordinación social asociadas a la producción de la plata.

La oligarquía conservadora se vió, en consecuencia, amenazada por esa nueva configuración de intereses que dió origen al Partido Liberal, pero éste, una vez alcanzado el triunfo, reconoció como a sus únicos integrantes a los miembros de la élite paceña como lo demuestra la depuración partidaria acaecida después de la guerra y que supuso la división del partido y el nacimiento de la facción de los liberales puritanos y la posterior fundación del Partido Republicano (1916). Todas las promesas de su programa se diluyeron siendo

la más importante la referente a la implantación en el país de un régimen federal. Con ello, volvieron a quedar fuera de los beneficios del poder aquellas regiones que si bien habían apoyado a los liberales contra el ejército unitario, poseían intereses contrapuestos y competitivos con los paceños, como ocurrió con el caso de Cochabamba.

Los intereses agrupados en el Partido Liberal que confluyeron en la guerra de 1899 no eran exclusivamente los paceños, pero sí fueron éstos los que resultaron beneficiados por la contienda. En un principio al Partido Conservador se oponían: primero, los grupos a los que la inestabilidad política del régimen de caudillos les favorecía el ascenso social; segundo, aquellos que veían en el ejército un medio de mejora ocupacional y de adquisición de privilegios sectarios; tercero, los constitucionalistas paceños que aspiraban a la supremacía de La Paz sobre Sucre; cuarto, Los liberales paceños; y quinto, los liberales partidarios de un régimen de gobierno Federal pertenecientes a regiones excluidas del tráfico de la plata.

Todos ellos se aglutinaron bajo la bandera liberal con objetivos particulares pero con un enemigo común representado por el gobierno minero que los excluía de la presidencia y extorsionaba sus ambiciones de participación política. Esto ocurría a medida que el monopolio de la plata declinaba y se hacían necesarias las posiciones de fuerza para mantener una hegemonía cada vez más cuestionada. Pero ese cuestionamiento y crítica de la gestión gubernamental conservadora no provenía sólo de los liberales, sino de sus propios correlegionarios quienes formaron parte de la Junta Revolucionaria de La Paz. Así, los constitucionalistas paceños que hasta poco antes del 12 de diciembre de 1898 constituían una fracción departamental del partido gobernante, se convirtieron en fracción opositora renunciando a su lealtad al partido conservador, y haciendo prevalecer su interés en defender las prerrogativas de su lugar de origen. Los liberales, por su parte, vieron la conveniencia de valerse de la crisis surgida por el tema de la radicación de la capital y expresada como resultado de la

pugna entre el norte y el sur para satisfacer sus ambiciones de poder como partido de la oposición. Y ambos se vieron en la necesidad de agruparse alrededor de una bandera que, al mismo tiempo de servir como vínculo de unión entre elementos heterogéneos, pudiera conceder al pronunciamiento la apariencia de ser fruto de una necesidad de importancia nacional. La enseña bajo la que se agruparon fue el federalismo. Los constitucionalistas de La Paz la apoyaron porque no podían declararse confesos de exclusivismo regionalista ante el resto de la república sin inspirar desconfianza en la opinión nacional; y los liberales porque no podían revelar sus verdaderos propósitos de partido ante sus ocasionales aliados por razones obvias. En suma, los liberales apoyaron la federalización del país para encubrir los exclusivismos de partido y para ocultar momentaneamente sus divergencias con el grupo conservador de La Paz. Por su parte, los constitucionalistas paceños aceptaron el emblema federalista, no por un sentimiento cívico sino por interés regionalista, puesto que consideraban que el Departamento del norte era el que más rentas aportaba al erario nacional y que, dentro del proyectado Estado Federal, La Paz sería favorecida por la exclusiva disposición de sus propios recursos (28). Por lo tanto, la explicación de las causas de la guerra como un enfrentamiento regional entre dos departamentos, el de La Paz y Chuquisaca, si bien no es inexacta porque estaba en juego el control de la sede de gobierno y de los órganos de decisión, y en consecuencia el control del poder político, proporciona una visión sesgada de los hechos. Sólo toma en cuenta las razones de algunos de los participantes.

La caída de los conservadores significaba ante todo el derrumbamiento de un comportamiento económico y político que impedía el desarrollo de economías regionales, que coartaba la movilidad social de las contra-élites en ascenso y que ponía en peligro un proyecto de reconstrucción de la élite entendido como una alternativa de supervivencia de un orden jerarquizado. Para su viabilidad se hacía imprescindible la sustitución de la oligarquía de la plata por otra con mayores

medios para hacerlo. Esto era algo difícil de entender para las familias privilegiadas de Sucre y Potosí que requirieron, por tanto, una guerra para renunciar a su hegemonía dentro de la misma élite. Por ésta razón, también el enfrentamiento de partidos, más que un enfrentamiento entre ideologías o modos de vida, consistía en una lucha entre quienes podían llevar a cabo un proyecto de reconversión de la élite para asegurar su continuidad como clase hegemónica y quienes ya habían cumplido esa función. De ahí la alianza entre liberales y constitucionales paceños contra la elección de Sucre como sede de gobierno, y de ahí su posterior hermanamiento en el rechazo de las formas federales aunque supuestamente habían luchado para imponerlas (29). La oposición partidaria era una oposición entre las diversas fracciones de la élite y como tal se expresó en 1899.

Terminada la guerra, se olvidó por parte del gobierno liberal su anterior rechazo al Estado centralizado propuesto por los conservadores. Es más, se amplió el cometido gubernamental anterior encaminado al desarrollo económico nacional, y se fomentaron las ideas de nacionalismo y de desarrollo de los recursos económicos como valores legitimadores que fueron haciéndose realidad a través de una política de normalización, centralización y construcción permanente de la infraestructura económica. Se sustentó la idea de que el Estado proporcionaría los mínimos medios necesarios dentro de los cuales pudieran prosperar las economías privadas y en este sentido la política liberal propició la disminución de la influencia eclesiástica, la generación de los fondos públicos a través de la importación-exportación y obligaciones fiscales modernas, el establecimiento del patrón oro y la creación del Banco Central, entre otras medidas (30).

En resumen, el Partido Liberal fue una alianza entre los grupos elitistas excluidos del poder político, una plataforma aglutinadora de los "desposeídos de la élite" que sería asumido más tarde por el Partido Republicano cuya función consistirá en regenerar las disposiciones dadas por el gobierno liberal con el propósito de que no se truncara el proyecto

de reconstrucción de la élite. Pero con el triunfo liberal no todos estos sectores elitistas que lo habían apoyado tuvieron cabida en la dirección del país sino que lo hicieron sólo aquellos con intereses en el departamento de La Paz, con lo que se explica por qué muchos de los análisis historiográficos privilegian la interpretación regional norte contra sur. Eso en vez de ser una causa fue la consecuencia del asentamiento de los intereses de la élite paceña como los hegemónicos (31).

2.2. La participación indígena

Para una mejor comprensión de las características y motivaciones de la intervención indígena como ejército auxiliar de apoyo del Partido Liberal en la Guerra de 1899, resulta conveniente distinguir entre los intereses que poseían el Partido Liberal y la Junta Revolucionaria en la participación de los indios en la contienda, y las expectativas que los mismos indios tenían sobre las ventajas que les podía deparar su apoyo a los liberales. Lo primero se vincula a la relación de los miembros de la Junta Revolucionaria con los indios, y, por tanto, a la campaña de propaganda y proselitismo desplegada en el Altiplano por el Partido Liberal; mientras lo segundo se refiere a si la participación india obedeció a un proyecto de rebelión largamente meditado o fue una consecuencia de la dinámica de la guerra que les dió una oportunidad de reivindicación. De los dos aspectos, es del primero sobre el que se pueden hacer precisiones ya que por la falta de documentación específica, el segundo ha de quedar en la formulación de hipótesis.

2.2.1. La campaña proselitista de los liberales en el Altiplano

En este apartado la Tesis pretende responder a dos preguntas: ¿Fueron los liberales los promotores del levantamiento indígena? y si esto fue cierto ¿qué tipo de promesas y acuerdos utilizaron para poner en pie de guerra a los indígenas del Altiplano?.

Cuando se inició la guerra, los revolucionarios

aseguraron que el indio se alzó por iniciativa propia y que ellos nada hicieron para empujarlo al escenario de la lucha civil (32). La Junta Revolucionaria aseveró que la administración federal no provocó el levantamiento indígena (33), como sostuvo más tarde el liberal Ismael Montes al decir que la indiada por "miras particulares y por espíritu de propia conservación se interesó directamente en la contienda y empezó a hacer la guerra por cuenta propia". Macario Pinilla, diputado conservador por La Paz, también coincidió con él en que los indígenas se vieron obligados a terciar en la guerra en defensa de su seguridad personal. Pasada la contienda esos argumentos fueron repetidos por quienes no quisieron reparar en los distintos factores del descontento indígena como es el caso del diputado liberal Nicanor Aranzaes. Este se esforzó por encubrir la acción instigadora de los revolucionarios paceños asegurando que los indígenas se levantaron "por espíritu de propia conservación" (34). Tales afirmaciones respondían en su mayoría a reproches dirigidos a Pando o la la Junta Revolucionaria de "haber movido a la indiada" contra "sus hermanos del sur" (35). Alfredo Jauregui Rosquellas secundó esas opiniones asegurando que tenía documentos que acreditaban que "varias comisiones enviadas por el gobierno revolucionario recorrieron el Altiplano...excitando a la indiada al alzamiento" y soliviantándola, diciendo que el ejército constitucional se dirigía a La Paz para exterminarla, "incendiar los campos", apropiarse de los ganados e "imponer los caprichos de un gobierno abusivo y desacreditado" (36).

A favor también de que los liberales llamaron en su auxilio a la población indígena están las palabras de Federico Zuazo, gobernador del Estado Federal de La Paz, quien manifestó que "la clase indígena fue llamada en los primeros momentos de la revolución para coadyugar a preparar la defensa y que habiendo mejorado el abastecimiento de pertrechos en los parques rebeldes convenía exhortar a los indígenas a retirarse a sus hogares" (37). Las declaraciones de Zuazo, lejos de eximir de responsabilidad a las autoridades revolucionarias, sirven para confirmar que los revolucionarios paceños, imposi-

bilitados para continuar la campaña por sí solos, en los primeros momentos de la rebelión, acudieron en demanda de la asistencia bélica del indio. Una vez disipada la amenaza de fracaso con la posterior recepción de armamento, procuraron en unos casos desautorizar la participación del indio en la guerra civil, o en otros, trataron de evitar el levantamiento, por lo menos en las zonas que no les era necesario. A esto se unen testimonios como el de Juan Bellot, corregidor del cantón Mochoza, que anunciaba a la Junta Federal de la provincia de Inquisivi que "la indiada" se encontraba "sobre aviso y en movimiento" para oponerse a la "invasión unitaria de acuerdo con el pueblo". Todos ellos permiten inferir que en la segunda quincena del mes de diciembre de 1898, se iniciaba en las provincias del Departamento de La Paz, un movimiento de agitación campesina que mejoraría la eficacia militar de las fuerzas rebeldes. Documentos como los anteriores son numerosos y hacen más factible la interpretación de que los liberales llevaron a cabo ya desde la década de 1880 una estrategia de captación de la población india como fuerza aliada para derrocar al grupo de poder en el gobierno. Prueba de ello son también las innumerables notas de prensa publicadas por los periódicos revolucionarios donde se hacen constar los donativos de la coca y aguardiente proporcionados por la población civil a "las avanzadas indígenas", y las instrucciones remitidas por el coronel Fermín Prudencio, Jefe del Estado Mayor del Ejército Federal, al sargento mayor Manuel Arancibia, Jefe de la Vanguardia de Aborígenes, igualmente publicadas por la prensa y en las que se pide procurar que los indígenas traten con humanidad a los prisioneros.

Los textos señalados confirman la tarea de soliviantamiento de los indígenas emprendida por los revolucionarios con el propósito de hacer frente a las fuerzas constitucionales. Esta tarea se llevó a cabo en aquellas zonas de mayor importancia para los movimientos y fines estratégicos de los beligerantes. Es decir, en las regiones que, para estas fuerzas, representaban áreas de tránsito, comunicaciones y abastecimiento como resultaron ser las provincias de Omasuyos, Paca-

jes, Sicasica e Inquisivi. El asiento más recomendable para servir de centro organizador del conflicto fue Villa Aroma (Sicasica), y en consecuencia, la Junta y el Alto Mando de las fuerzas rebeldes pusieron a las cuatro provincias bajo la sujeción de un sólo jefe político con residencia en dicha localidad (38).

Como se ha dicho, en el año 1896 gran número de indígenas se congregaron al grito de viva Pando en los alrededores de La Paz, con el propósito de manifestar su apoyo al candidato liberal, el coronel José Manuel Pando. El diario El Comercio, que apoyaba la candidatura del gobierno, acusó a éste de ser el "azuzador de los indígenas". Ese hecho le confería la posibilidad de disponer de un importante elemento de lucha cuyo poder no convenía desaprovechar frente a las estrategias de alianzas electorales desplegadas por los partidos conservadores:

"Tenemos hombre y armas, disciplinaremos y armaremos a la indiana y emplearemos recursos extremos para no ser soyuzgados por un gobierno cuyo gobernador ha sido el fraude electoral" (39)

Había, además, en la historia de Bolivia un precedente del empleo de contingentes indígenas en una contienda civil, como fue el caso del federalista y Prefecto de La Paz, Casimiro Corral. Este, en 1870, cursó a las subprefecturas de provincia una circular instruyéndoles para que solicitaran a los aborígenes su concurso bélico para emprender la campaña contra el gobierno despótico de Melgarejo. Días más tarde, el coronel Agustín Morales, jefe militar de la insurrección, acordaba en la población de Ayo-Ayo, con el jefe del ejército indígena, las condiciones en que debería intervenir el indio en la guerra civil de 1870-71 (40).

Este antecedente y la progresiva seguridad de que el régimen de partidos políticos, tal como había sido acaparado y diseñado por los conservadores, difícilmente iba a permitir a los liberales el acceso al poder, les llevó a dar un golpe de Estado apoyándose en la población india como ejército auxiliar

(41). Posiblemente esa decisión no obedecía a un plan diseñado y trabajado laboriosamente desde 1880 sino que fue materializándose ante los continuos fracasos electorales. Fue más como un recurso al que recurrir en caso de extrema necesidad, que una opción diseñada de antemano.

Tal precisión no niega la tarea de proselitismo liberal en el campo, sino que la afirma al dotarla de un carácter promisorio y alternativo que juega con los miedos interiorizados de la mancomunidad blanca-mestiza respecto al indio. El propósito era que éste fuera visto por los conservadores como una amenaza latente que podía dislocar su posición de un momento a otro si no se transigía con las expectativas liberales. Pero como el rumor acerca de un pacto indio-liberal no resultó suficiente para renovar la presidencia (42), la comunicación entre liberales e indígenas se fue progresivamente afirmando y al final se concretó en un ejército auxiliar. Este ayudó a Pando tanto a conocer los movimientos del adversario en su marcha hacia el norte, el número de las tropas y las condiciones en que ese avance se realizaba, como a obstaculizar las marchas del ejército constitucional, privarle de medios de vida y crear alrededor de sus soldados un elemento hostil capaz de perturbarle (43).

2.2.2. Las razones del indio. Significado de Mohoza

De todas formas, aunque se tiene constancia de esa ayuda y del agradecimiento liberal, no se sabe por qué la población indígena accedió a ello y cómo obró el Partido Liberal para conseguirlo. Sin embargo pueden aventurarse algunas propuestas. Respecto a la actuación del Partido Liberal parece que funcionaron las redes de clientela de los terratenientes y autoridades locales con intereses políticos y económicos en La Paz. Tales grupos llevarían a cabo una labor de captación de adeptos a través de promesas de mejora social y de ofertas de restitución de tierras (44). Sus interlocutores serían curacas indígenas entre los que destacaría Pablo Zárate Wilka por su supuesta amistad con el coronel Pando.

Esto, si bien fortalece la hipótesis de captación de apoyo a través de clientelas, no deja tan claro que ese progresivo consenso indígena para ayudar a los liberales estuviese a la vez condicionado por un programa reivindicativo propio que se hubiese gestado independientemente y sin la dirección liberal. Sobre todo lo que resulta más difícil de creer es que se lograse el apoyo comprometido y consciente de todos los indígenas a un plan diseñado por unos dirigentes indios, a los que reconocían con la legitimidad suficiente para llevar a cabo la elaboración de un programa de insurrección. Y esta duda no obedece a que se cuestione su capacidad organizadora sino a considerar que los indígenas vieran viable su sublevación y el derrocamiento de la población blanca tal como lo plantea Ramiro Condarco quien de la información recogida del proceso de Mohoza (1901-1904), del que sólo se conservan cuatro volúmenes en el Archivo Prefectural de La Paz, obtiene los siguientes propósitos de actuación de los indígenas:

1. La restitución de tierras de origen. Condarco extrae esa afirmación del testimonio producido por gran número de informantes sobre el hecho de que el cacique Lorenzo Ramirez expresó haber recibido órdenes de Pablo Zarate Wilka para convertir las fincas en comunidades. El asesinato de los propietarios y el asalto a las haciendas de Calacala, Pocusco y Manuhuta, fueron la expresión de ese propósito.

2. El exterminio o, por lo menos, el sometimiento de las castas dominantes a las nacionalidades de origen. La intención de los indígenas en Mohoza era hacer realidad la guerra de eliminación declarada por Wilka contra blancos y mestizos. Y una derivación natural de ello fueron los asesinatos de los Hidalgo, de los jefes y soldados del escuadrón Pando, de muchos vecinos, y de los patrones de las haciendas aledañas.

3. La constitución de un gobierno indígena. Lorenzo Ramirez, cacique y uno de los principales oficiales de Zarate Wilka, según pruebas acumuladas en el proceso manifestó al párroco de Mohoza, Ramiro Escobar, que por orden de Wilka, "las autoridades debían ser indígenas" y que el propio párroco "debía salir de entre ellos".

4. Reivindicación de los valores culturales propios del pocopreciado patrimonio hispano-aborígen que se expresó en la imposición del traje de bayeta a todos los vecinos del pueblo de Mohoza, en su mayoría mestizos vestidos de modo occidental.

5. Demostraciones de acatamiento y vasallaje a la autoridad de Pablo Zárate Wilka, quien fue vitoreado jefe supremo por los indígenas de Mohoza (45).

Estos presupuestos se resumen en la aseveración del ensayista Quintín Barrios referente a que "se ha visto por la relación de los hechos (juicio de Mohoza) que la indiada proclamó su independiencia completa de todo poder, sin más sujeción que los mandatos de Wilka" (46). Es decir, la sublevación india se llevó a cabo por su propia voluntad sin que los liberales estuvieran involucrados en esa decisión. Pero ésta defensa de un proyecto planificado de sublevación india, autónoma a las decisiones de los partidos, perjudicaba más que beneficiaba a los indígenas. Esto parece si, sobre todo, tenemos en cuenta que en todo el debate sobre qué hacer con el indio una de las razones dadas al mantenimiento y pertinencia de una continuada conducta opresiva hacia ellos se debía a que se les consideraba "criminales sanguinarios en continuo acecho de la raza blanca". Si se admitía que la actuación india en la Guerra Federal de 1899 se debía únicamente a sus deseos independentistas, se negaba también cualquier justificación a su comportamiento contra la mancomunidad criolla-mestiza, con lo que quedaban a merced de cualquier abuso por parte de ésta. Por tanto, el hecho de que se les culpara de una "guerra de razas" cuya finalidad sería el exterminio de los blancos y su suplantación en la dirección del país por los indios, no beneficiaba a éstos aunque desde luego sí favorecía a aquellos otros que buscaban la ayuda india sin la obligación posterior de su inclusión política como ciudadanos.

Grabada en la mente de la mancomunidad criolla-mestiza la imagen de un indio terrorífico y canibal que buscaba arrebatarse sus privilegios, era difícil llegar a un acuerdo que garantizase una convivencia étnica simétrica. Por eso,

toda la propaganda sobre la "guerra de razas" tanto antes como después de los acontecimientos de 1899, sirvió para justificar la represión y la opresión del indígena en vez de para mostrarle como un individuo apto para participar con plenos derechos en la vida política activa de la nación. Es más, tras la Guerra Federal era necesario no sólo descalificarlo como individuo útil y participativo en el orden social sino también disculpar al Partido Liberal por haber mediado en su incorporación en la contienda. De ahí que el liberal y futuro Jefe de Gobierno, Ismael Montes, asegurase que Wilka se encontraba animado de miras particulares, o que el también liberal y más tarde líder del Partido Republicano, Bautista Saavedra, escribiera que Pablo Zárate Wilka "meditaba el alzamiento de toda la raza aymara en la República" y que en el curso de la rebelión hubo incitación tanto al "exterminio de los blancos" cuanto a un "levantamiento extraordinario que encendiera una guerra de castas sangrienta y bárbara". Semejantes opiniones también fueron expresadas por un magistrado orureño poco después de la rebelión indígena que aseguro que "el caudillo Wilka había predicado el exterminio de esta raza y la constitución de un gobierno indígena". Claudio Quintín Barrios aseveró que "la indiada manifestó en el curso de la rebelión sus intenciones exclusivistas de medrar a la sombra de la victoria, recuperando la dominación de su raza en el país, aniquilando, sus infundadas pretensiones, el poder de las clases civilizadas de la sociedad" con expreso consentimiento de Pablo Zárate (47). Tampoco puede desconocerse que el día 28 de febrero de 1899, el ciudadano Jose Murillo procuraba prevenir desde Yaco (actual provincia de Loayza, La Paz) al coronel Jose Manuel Pando porque "toda la indiada se había puesto en pie de guerra" con la idea de tener por caudillo sólo al "indio Wilca" sin pensar en guardar obediencia a "las autoridades" (48). A pesar de que esta noticia confirmaba lo que hasta ese instante no había pasado de ser un oculto presentimiento, no podía constituir una preocupación de efectos modificadores en la conducta del ejército federal ni menos detener la marcha de lo que hasta entonces se había determinado.

En general, tales afirmaciones presentaban la acción indígena como resultado de un programa de acción perfectamente meditado de antemano que se proponía servir a la realización de un fin: la restitución de tierras de comunidad por medio de la constitución de un gobierno indígena. Por otro lado, había una razón para que las pretensiones indias mencionadas constituyeran objetivos inseparables. Esta estaba referida a la experiencia ofrecida por los anteriores gobiernos bolivianos que, después de recibir y aprovechar para su encubramiento los servicios bélicos de la población indígena, olvidaban sus promesas y sancionaban nuevos métodos de usurpación de tierras. Así lo habían demostrado las administraciones que, tras la caída de Melgarejo, dispusieron la restitución de las tierras usurpadas bajo la administración presidencial, pero sin abstenerse después de establecer nuevamente el despojo de tierras de comunidad bajo las leyes de exvinculación.

Visto lo anterior, es posible que los cabecillas campesinos prometieran a Pando su participación condicional en la futura contienda a cambio de protección oficial en sus litigios con los usurpadores de tierras; quizá Zárate Wilka solicitara el reconocimiento de rangos militares a favor de los jefes indígenas, y Pando, tomando en cuenta la necesidad de facilitar la organización y movilización de las fuerzas indígenas, otorgase a éste la suprema jefatura de las mismas, prometiéndole también la liberación del indio y la participación del mismo Wilka en las funciones de gobierno (49). Pero debido a la ausencia de testimonios escritos, no se puede afirmar que Pando formalizase convenios con Wilka en la forma expuesta; lo único demostrable es que el líder indio apareció en el escenario de la guerra civil con el grado de general de división e investido del rango de comandante en jefe del ejército indígena, ejército aparentemente puesto al servicio incondicional de Pando y apoyando la rebelión de La Paz (50).

Por otra parte, a partir de la carta de Pablo Zárate Wilka a Pando de 27 de junio de 1896 existen razones para asegurar que las relaciones de amistad política existentes entre Pando y Zárate no fueron un mito; como tampoco lo fue

que Pando gozara de la simpatía y del apoyo moral de los indígenas dirigidos por Zárate por lo menos desde el año 1896, y que éstos le reconociesen como a su caudillo supremo, y que Zárate escribiese y visitara a Pando en su residencia en La Paz. La conferencia entre Pando y Fernando Eloy Guachalla, secretario general de la Junta de Gobierno, el 25 de marzo de 1899, prueba que Zárate fue autoridad militar y política indígena suprema, oficialmente reconocida por Pando, por la Junta y por el llamado ejército de la revolución federal (51). Parece, pues, evidente la existencia de acuerdos previos para una acción concertada entre los cabecillas indígenas y los liberales. Sin embargo, sigue sin resolverse el grado y las razones de apoyo de los indígenas a sus cabecillas (52), el grado de legitimidad que poseían en su papel de representantes, así como los detalles, las condiciones recíprocamente aceptadas, y si, en realidad, existió un proyecto de rebelión planificado de antemano por los indígenas.

En este contexto, conviene precisar en la medida de lo posible cuáles fueron los medios de agitación esgrimidos por Pando y los instigadores liberales en su empeño por lanzar a la población indígena contra el gobierno conservador. Alfredo Jauregui Rosquellas afirma que los revolucionarios del norte persuadieron a los indios diciéndoles que el ejército de Severo Fernández Alonso se dirigía a La Paz con el propósito de imponer a su paso una atmósfera de terror, destrucción, incendio y robo. De tal amenaza dedujeron que la conservación de su hacienda y su propia vida dependía de cual fuese su actitud frente a las fuerzas alonsistas. Augusto Guzmán acoge este juicio indicando que los federalistas alzados en armas "prometieron al indio tierras, libertad" (53).

De ahí que la restitución de las tierras perdidas por las comunidades a raíz de las leyes de exvinculación y la vuelta a un pacto de reciprocidad entre el Estado y los ayllus que garantizase sus posesiones a cambio de servicios, fueran las peticiones más recurrentes y las que provocaron una mayor movilización india, al igual que las referidas a recuperar y vengar los víveres y animales requisados por el ejército. Las

exigencias no eran nuevas y formaban parte de la mayoría de sublevaciones indias ocurridas desde el intento de reforma agraria de Melgarejo en 1866.

En cuanto a la participación indígena en el gobierno en su versión "guerra de razas", no parece tan probable que se produjese con esa intención, sobre todo si se tiene en cuenta que un programa de sublevación basado en la destrucción de los blancos perjudicaba a los indios más que a nadie. Les cerraba de antemano su acceso a la comunidad nacional por el temor que inspiraban (54). Además, a juzgar por la documentación del proceso de Mohoza, que muestra como la "guerra de razas" era una expresión utilizada más por las autoridades judiciales que por los mismos inculpados quienes se veían sometidos a su aceptación sin haberla presentado como propia; y a juzgar, también, por las numerosas notificaciones en la prensa y los boletines oficiales, dicha expresión actuaba de comodín aplicado a cualquier acto indígena que propusiese una remodelación de las condiciones sociales y étnicas.

En conclusión y como se ha venido indicando, esta investigación defiende como propuesta interpretativa que las amenazas indias de trastocar las relaciones de poder a su favor no consistían tanto en masacrar a la mancomunidad criolla-mestiza como en buscar una vía de negociación que les otorgara una mejora de sus condiciones de vida. Si existió algún acuerdo de los indígenas con Pando y con la Junta Revolucionaria, posiblemente consistió en alguna forma de hacer a los indios copartícipes en el gobierno, es decir, ciudadanos activos en la vida política de Bolivia. Y también es probable que, iniciada la guerra e instados muchos indígenas a proveer de alimentos al ejército Liberal y a retirarse de la contienda en aquellas zonas donde el peligro del ejército unitario iba cesando, éstos intuyeran que nada de lo prometido les iba a ser dado. Cuando esa intuición se convirtiese en convencimiento, decidirían iniciar su guerra particular. Comenzaría, entonces, una desesperada batalla en solitario con la finalidad de lograr algo con que transar con los liberales una vez

que hubiese terminado la guerra. Afirmar que la población india planeaba de antemano la destrucción de la raza blanca equivale a afirmar su suicidio, además de adjudicarles una unidad de grupo que difícilmente podían tener a juzgar por las disputas entre comunidades a causa de la tierra (55). Su experiencia con las autoridades blanco-mestizas a través de los juzgados les pudo dotar de un conocimiento bastante exacto sobre las formas de gobierno y Estado y su posible lugar en ellas, haciéndoles ver como posible cierta participación política más que el exterminio de los blancos. De ahí que su presencia fuese más amenazadora en cuanto a que su propuesta era más viable y legítima.

En lo relativo a la historiografía que apoya la idea de una rebelión india programada durante años, se podría decir que quienes la postulan en vez de reconocer la capacidad de organización indígena se están haciendo eco de toda una propaganda documental expresada por el clero y los intelectuales reformistas de comienzos del siglo XX. Si bien éstos defienden al indio como víctima de la opresión blanco-mestiza colonial y republicana no dejan de repetir su peligrosidad e instintos bestiales. Eso sí, no por su voluntad sino a consecuencia de los constantes abusos que sufren por parte de las autoridades locales y los terratenientes. Tal actitud lejos de pretender sólo una regeneración del indio, encaminada a hacerle un individuo apto para el progreso, buscaba justificar la necesidad que tenían los bolivianos de una reforma educativa india llevada a cabo por, aunque no conjuntamente, los intelectuales y el clero. El miedo al indio era, por tanto, un sentimiento que se tenía que explotar para que la presencia de estos colectivos quedase legitimada. Y no se olvide que el mayor fomento del miedo al indio viene dado por la propaganda que alimenta la existencia de su movilización para destruir a la población blanca. Es decir, por aquella que apoya un plan de rebelión planeado de antemano por los indios a quienes se describe acechando en la oscuridad hasta tener una ocasión propicia para eliminar a los "blancos". Los proyectos intelectual y eclesiástico de civilizar al indio, que se discutirán

en detalle más adelante, no podían prescindir de exacerbar los miedos interiorizados de la población blanco-mestiza ya que dependía de ese acto para ser considerado necesarios por la élite en el poder. Mientras el indio se entendiese como un ser perjudicial y terrible para la continuidad de los privilegios sociales y étnicos blancos, el proyecto aludido dotaría a sus autores de una función imprescindible: la salvación de los derechos señoriales a través de la reforma del indio como trabajador útil. En resumen, no se trata tanto de invalidar aquellas posiciones historiográficas que defienden la autonomía política indígena como de mostrar a quienes beneficiaba mayormente y cuál era su alcance real.

En mayor medida, los análisis históricos criticados desconocen que el medio donde se desarrolló la revolución Federal era una sociedad prescriptiva que descansaba sobre relaciones de paternalismo y deferencia, de dominio y de subordinación. Aunque las protestas indias manifestaban un sentimiento compartido de injusticia junto con el deseo de destrucción del sistema social vigente en el agro (56). Ello no se contradecía con un sentimiento de resignación ante la inevitabilidad del orden social establecido; resignación que se sintetizó en un pacto de reciprocidad en el que se establecían obligaciones hipotéticas entre ambas partes. Las leyes de ex-vinculación de tierras y la supresión del tributo amenazaron la continuidad del pacto entre el Estado y las comunidades, y originaron, por tanto, una oposición india al cambio de status jurídico que les quitaba el privilegio de ser indios. Para ellos el pago del tributo era la garantía contra el aumento arbitrario de sus obligaciones fiscales a la vez que les concedía la propiedad colectiva de la tierra. La ruptura del pacto Estado-ayllu significaba, entonces, que el entramado mismo que daba validez al ejercicio de los derechos que el pacto implicaba se hizo progresivamente más inseguro (57). La organización comunal indígena necesitaba, en consecuencia, una solución a la progresiva deestructuración en la que se encontraba. Los liberales fueron conscientes de ello y lo aprove-

charon para derrocar al gobierno conservador.

El Partido Liberal en su tarea de captación de apoyo indígena asumió la apariencia tanto de restaurar un "orden justo" que había sido traicionado como de enderezar un proyecto social, y al hacerlo ofreció un lugar de definición a los indígenas frente a la incertidumbre y desubicación que significaba la ruptura del pacto. Esa promesa de estabilidad permitió que los indígenas apoyaran al Partido Liberal frente al Partido Constitucional de Severo Fernández Alonso. Pero del conflicto de 1899 surgió un sentimiento de amenaza a las bases del poder oligárquico que aceleró el posterior acuerdo entre los dos partidos en pugna frente al elemento indígena. Una vez que los indios ayudaron a dirimir el problema de competencias intra-élites, se olvidaron sus peticiones como grupo (58). Esta marginación de las reivindicaciones indígenas se logró mediante un pensado esfuerzo periodístico por magnificar la Guerra Federal como una "guerra de razas" que se concretó en la propaganda la crueldad y deficiencias indias que acompañaron al Juicio de Mohoza (1901-1904). En este se condenó no sólo la masacre del batallón "Pando" perteneciente al ejército federal sino las de Corocoro y Ayoayo esta vez perpetradas contra el ejército unitario bajo el auspicio de los liberales. Pero en el juicio no se tuvo en cuenta ese hecho, atendiéndose únicamente al salvajismo con que los indígenas exterminaron a los soldados. Quizás si en Mohoza los indígenas no se hubieran rebelado contra la fracción de la élite criolla-mestiza de la que eran aliados, los acontecimientos de Corocoro y Ayoayo hubiesen pasado desapercibidos o justificados por el carácter opresivo de los soldados unitarios, pero sucedió lo contrario y los liberales percibieron el peligro que encerraba contar con la ayuda indígena, no ya tanto por la matanza como por las exigencias que vendrían después (59). Posiblemente lo ocurrido en Mohoza les hizo tomar consciencia de la realidad de las demandas indias y de las transacciones sociales que sucederían a la guerra y que atentarian a los privilegios tradicionales de la mancomunidad criolla-mestiza. El llamamiento que Pando envió al presidente Alonso:

"Indiada guerrea motu-propio a raza blanca; aprovechando despojos beligerantes, se hará poderosa; nuestras fuerzas unidas ahora, apenas podrán dominarla; parece imposible que no lo aperci-
ba usted" (60)

más que una búsqueda de un acuerdo de paz fue un reconocimiento de la unidad social y étnica que ambas fracciones en lucha representaban y, por tanto, el momento de separación de los federales del ejército auxiliar indígena. La admisión del peligro indio no impidió a Pando seguir empleándolo pero si significó la ruptura de un acuerdo de futuro que se concretaría más tarde en actos de represión gratuitos como lo expresó el coronel Pando a Eliodoro Villazón pocos días después de la batalla del Segundo Crucero: la "Indiada vuelve a sus hogares sin haber causado daños. Conviene reprimir tendencias de sublevación" (61).

Los procesos judiciales contra Pablo Zárate Wilka y los curacas o caciques que apoyaron la masacre de Mohoza, sirvieron para demostrar de manera tangible la renuncia del Partido Liberal a los medios que lo llevaron al poder. A su vez, el tono racista con que se adornó a esos acontecimientos, hizo pensar que las relaciones sociales en el campo se mantendrían como hasta entonces (62). El fin de la guerra fue inoportuno para el levantamiento de Zárate y detuvo el proceso de subversión social, pero fue necesario un discurso acerca de su ferocidad para reforzar el carácter reaccionario de la sociedad ante un posible ascenso social de un sector como el indígena al que tradicionalmente se le había considerado como subalterno y cuya inclusión política se interpretaba como la ruina de las minorías dominantes.

En resumen, la propuesta que se ha venido defendiendo hasta ahora consiste en admitir la tarea de proselitismo y propaga liberal en el Altiplano con antelación a 1899 sin que ello signifique que se apoye la existencia de un plan de sublevación india gestado durante años. No se niega que la población indígena careciese de reivindicaciones concretas que hacer al poder blanco-mestizo sino que éstas no se materiali-

zaron en un programa de autonomía política liderado y jerarquizado. Por otra parte, si bien en un principio se pretendía que la fuerza indígena actuara como amenaza potencial más que como ejército auxiliar, el abuso electoral llevado a cabo por los partidos conservadores hizo que los liberales viesen sólo en el golpe de Estado la posibilidad de acceder al poder. En consecuencia, la presencia india de ser una amenaza pasó a convertirse en arbitro de la contienda. Pero cuando los liberales fueron conscientes de la fuerza india, comprendieron lo peligrosa que era su inclusión política para el proyecto de reestructuración política de la élite. El resultado fue un acuerdo entre las fracciones de élites enfrentadas que se sintetizó en la "Unión Liberal" bajo el lema de la regeneración de Bolivia. En cuanto a los indígenas fueron necesarios diez años para que volvieran a movilizarse. La violencia de los hacendados, la puesta en venta de las tierras, y su fracaso en recuperarlas a través de procesos legales supusieron un cambio en las tradicionales relaciones entre Estado y comunidades. El temor por parte de los vecinos de La Paz ante la rebelión indígena fue un factor instrumental prioritario en el rediseño de esas relaciones.

En consecuencia, el cambio partidario que se estableció a partir de la 1899, permitió a los liberales configurar una sociedad civil en la que se mantuvo un régimen estatal y patrimonial propiciado por la explotación de los miedos interiorizados de la mancomunidad criolla-mestiza cuya expresión fue la "guerra de razas". El Partido Liberal actuó como un elemento de modernización de la tradición ya que mediante la novedad que implicó el régimen partidario y la propaganda de desprestigio de la etapa conservadora, hizo posible la consolidación de un proyecto de reconstrucción oligárquica. Con esta acción los liberales cerraron la crisis presente durante el periodo caudillista, que con su clima de inestabilidad política había afectado a la definición de los integrantes de la élite. El entramado político se redujo a un trueque del poder dentro del bloque socialmente dominante. Ya no se defendía a un grupo de la élite sino la posición de ella

misma como conjunto dentro de la sociedad. Pero para que esto se materializase era imprescindible que se estableciese un discurso en que el estamento indigena y la "clase artesana" eran los causantes de todos los males que le sucediesen a Bolivia, más concretamente, los que evitaban el progreso y la modernización del país sea como fuese que ambos términos fueran interpretados.

Lo indio y su forzada separación de lo mestizo se convirtieron, así, en el elemento que dinamizó y a la vez asentó los presupuestos de reconstrucción del proyecto oligarquico. El Partido Liberal, mediante la explotación de una "cultura de la incertidumbre y el miedo" generada en la interacción social entre indios, mestizos y blancos, liquidó las rebeliones indígenas y sus consecuencias, y frenó a otros sectores sociales en sus exigencias de realización de un proyecto nacional.

NOTAS

- (1) FELLMAN VELARDE, Jose. Historia de Bolivia. La Bolivianidad semifeudal, vol. II. Los Amigos del Libro, Cochabamba, 1970, pp. 289-295.
- (2) ALMARAZ PAZ, Sergio. El poder y la caída. El estaño en la historia de Bolivia. Ed. Amigos del libro, La Paz-Cochabamba, 1987, pp. 75-76. VALENCIA VEGA, Alipio. El pensamiento político en Bolivia, ed. Juventud, La Paz, 1973 (1953), pp. 52-53.
- (3) CONDARCO MORALES, Ramiro. Aniceto Arco, ed. Amerindia, La Paz, 1985, pp. 444, 810.
- (4) KLEIN, Herbert. Bolivia: the evolution of a Multi-ethnic society, Oxford University press, Oxford, 1982.
- (5) ALBARRACIN MILLAN, Juan. El poder minero, Urquiza Ltda., La Paz, 1972, pp. 25-28.
- (6) "Entre 1895 y 1899 el promedio de exportaciones anuales de plata se valoraban en 15.4 millones de bolivianos y el valor de las exportaciones en 1900 fue de 14.6 millones de bolivianos, cifra que entre 1900 y 1904 se redujo a 10.2 millones de bolivianos. En 1890, los aranceles sobre exportación de goma representaban sólo el 2% de la renta nacional, porcentaje que se elevó a 36% en 1902" en James DUNKERLEY. Orígenes del poder militar en Bolivia. Historia del ejército, 1879-1935, ed. Quipus, La Paz, 1987, p. 67.
- (7) DUNKERLEY, James. 1987, pp. 66-68.
- (8) RENE MORENO, Gabriel. "Nicomedes Antelo" en Notas biográficas y bibliográficas, I. Cervantes, Santiago de Chile, 1901.
- (9) ROCA, Jose Luis, Economía del regionalismo boliviano, ed. amigos del libro, Cochabamba, 1980.
- (10) RODRIGUEZ OSTRIA, Gustavo. "El regionalismo cochabambino, siglos XIX-XX" en Debate regional. Conceptos y actitudes de las élites regionales, Ceres, Cochabamba, 1991, págs. 26-27.
- (11) RODRIGUEZ OSTRIA, Gustavo y Humberto SOLARES. Sociedad oligárquica, chicha y cultura popular, ed. Serrano, Cochabamba, 1990, pp. 55-58.
- (12) ROCA, Jose Luis. "Oruro y la Revolución Federal", Historia y Cultura, no. 4, UMSA, La Paz, 1981, pp. 117-8.
- (13) ROMERO PITTARI, Salvador. "El nuevo regionalismo", Síntesis, no. 14, Monográfico sobre Bolivia, Madrid, 1991, pp. 197-200.

- (14) CONDARCO MORALES, Ramiro. Zaraté, el temible Willka: historia de la rebelión indígena de 1899, Renovación, La Paz, 1983, pp. 267-268.
- (15) PLATT, Tristan. "La experiencia andina de liberalismo boliviano entre 1825 y 1900: raíces de la rebelión de Chayanta (Potosí) durante el siglo XIX" en Steve STERN (comp.). Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII y XX, IEP, Lima, 1990, pp. 265, 287, 296, 301.
- (16) DEMELAS, Marie Danielle. "Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia, 1880-1910. Historia Boliviana, 1/2, Cochabamba, 1981.
- (17) DEMELAS, Marie Danielle. "Nota sobre "Darwinismo a la criolla", Historia Boliviana, II/2, Cochabamba, 1982.
- (18) DEMELAS, Marie Danielle. "Comentario sobre la reedición del "Zarate Willka" de Condarco Morales", Historia Boliviana, IV/2, Cochabamba, 1984.
- (19) PIEL, Jean y Marie Danielle DEMELAS. "Juegos y apuestas de poder en los Andes: los casos de los departamentos del Cuzco y de La Paz (entre 1880 y 1920)", Ponencia presentada a la Mesa Redonda de AFESAL, "Les frontieres du pouvoir en America Latine", Toulouse, noviembre, 1981.
- (20) RIVERA CUSICANQUI, Silvia. "Rebelión e ideología: lucha del campesinado aymara del Altiplano boliviano, 1910-1920", Historia Boliviana, 1/2, Cochabamba, 1981, p. 97.
- (21) ZAVALETA MERCADO, Rene. Lo nacional-popular en Bolivia, ed. Siglo XXI, México, 1986, pp. 16, 146.
- (22) GRIESHABER, Erwin. "Resistencia indígena a la venta de tierras comunales indígenas del sur de Bolivia en el siglo XIX", Data no.1, INDEAA, 1991, pp. 131-132.
- (23) PEARSE, Andrew. "Campesinado y revolución. El caso de Bolivia" en Fernando CALDERON Y Jorge DANDLER (comp.). Bolivia: la fuerza histórica del campesinado, UNSRID-CERES, Ginebra, 1986, pp. 33-334, 338.
- (24) DUNKERLEY, James. 1987, p.67.
- (25) "La actual guerra civil importa una lucha antinacional de una provincia contra otra y aún se puede decir que es una guerra de razas que afecta hondamente a la unidad nacional y que nos sepulta de nuevo en la barbarie", Boletín Oficial, no.60, La Paz, 19 de marzo de 1899.
- (26) "La guerra civil en Bolivia", Los Debates, La Paz, 5 de marzo de 1899.

- (27) RIVERA, Silvia, "La expansión del latifundio en el Altiplano boliviano: avances para la caracterización de una oligarquía regional" en Avances, no. 2, La Paz, 1978.
- (28) CONDARCO MORALES, Ramiro, 1983, p. 364.
- (29) ALP. Colección Julio Cesar Valdez. Discurso del Sr. Ferándo E. Guachalla, Presidente del Comité Federal, La Paz, 1899, f. 1-5.
- (30) MALLOY, James. Bolivia: La revolución inconclusa, Ceres, La Paz, 1989, pp. 34-36.
- (31) ALP. Colección Julio César Valdez (JCV). Conferencias telegráficas del 18 y 19 de abril de 1899 entre los miembros de la Junta de Gobierno, La Paz-Oruro, 18 y 19 de abril de 1899, Caja, no.9, pp. 15-24.
- (32) CONDARCO MORALES, Ramiro, 1983, p. 164.
- (33) Ibidem, p. 165.
- (34) Carta de Mariano Baptista a D. Jacóbo Ramallo, Cochabamba, 5 de septiembre de 1899, El Comercio, La Paz, 7 de julio de 1899.
- (35) CONDARCO MORALES, Ramiro, 1983, pp. 166.
- (36) "...los horrores del norte son tales o menoa crueles que lo que dice de ellos la prensa. no hay que culpar a Pando de esos actos de salvajismo, son la causa de un rencor de una raza oprimida y vencida por siglos. Los alonsistas dicen que Pando ha hecho mal en aprovecharse de los indios, somos de la opinión, como todo el mundo sensato, que Alonso si lo hubiera podido habría hecho otro tanto. En tal caso su prensa no clamaría al cielo contra esos salvajes, sino que los llamaría la altva raza indígena, los descendientes de los incas", Boletín Oficial, no. 63, La Paz, 20 de marzo de 1899.
- (37) CONDARCO MORALES, Ramiro, 1983, p. 167.
- (38) Ibidem, pp. 168-69.
- (39) Carta de Pando a "sus amigos políticos de la República", Sicasica, 1 de febrero de 1899 en El Comercio, Cochabamba, 24 de abril de 1899.
- (40) CONDARCO MORALES, Ramiro, 1983, p. 170
- (41) "Reconociendo el Partido Liberal que sería esteril la lucha en terreno legal por estar la coacción y el soborno arraigados en el sistema de gobierno, resolvió hacer una protesta armada (...) los abusos del gobierno y su descarada intervención en las clecciones de mayo, enasperaron a la gente pensadora del país; y la oposición, alentada por la mayoría del pueblo boliviano, tomó una actitud enérgica contra el mal

gobierno", Luis S. CRESPO, Rasgos biográficos del Presidente de Bolivia General Jose Manuel Pando, I. Los debates, La Paz, 1899, pp. 8-9

(42) ANB. Informes del Prefecto y del Administrador del Tesoro Público de La Paz, I. La revolución, Oruro, 1891, p. 3-8.

(43) CONDARCO MORALES, Ramiro, 1983, p. 17.

(44) ANB. MI. Al Sr. Ministro de Gobierno y justicia, D. Macario Pinilla. Desde la Presidencia del Directorio Central del Partido Liberal a 10 de marzo de 1898, tomo. 298. año 1898, no.19, p. 1.

(45) CONDARCO MORALES, Ramiro, 1983, p.p. 19-23.

(46) Ibidem, p. 279.

(47) Ibidem, p. 266.

(48) Ibidem, p. 269.

(49) Ibidem, p. 172.

(50) Ibidem, p. 174

(51) Ibidem, pp. 175- 176

(52) Los caudillos principales eran Lorenzo Ramirez en Inquisivi; Juan Lero en Tapacari y Paria; Feliciano Wilka en Tapacari y Chayanta y Mauricio Pedro en Sacaca en Ibidem, p. 263.

(53) GUZMAN, Augusto. Mariano Baptista, p. 150.

(54) ANB. MI. tomo 299, no. 26, "Al señor Minitro de Estado en el despacho de gobierno y justicia de Sucre. Del Prefecto de Oruro a 20 de junio de 1898", año 1898, pp. 5-9.

(55) ANB. MI. tomo 299, no.21, "Prefectura y comandancia general de Cochabamba", año 1898, f. V-VII, XXVI

(56) PEARSE, Andrew (1986).

(57) ANB. MI. tomo 299, no.26, Ibidem, año 1898, p. 5.

(58) "Guerras rurales", El Comercio de Bolivia, La Paz, 15 de noviembre de 1900.

(59) "Sublevados", El Comercio de Bolivia, La Paz, 9 de abril de 1900.

(60) "Carta de Jose Manuel Pando a Severo Fernández Alonso, Caracollo, 6 de marzo de 1899", en El Comercio. La Paz, 15 de marzo de 1899.

(61) CONDARCO MORALES, Ramiro, 1983, p. 373.

(62) DUNKERLEY, James. 1987, p. 75.